

Cuatro falacias sobre la transformación chilena

Javier Martínez

SUR Profesionales Consultores

En el extremo sur de América, aislado por la imponente masa cordillerana de Los Andes y la vastedad del Océano Pacífico, dotado de una geografía casi inverosímil por su estrechez y longitud, Chile ha sido considerado por muchos analistas como uno de los grandes laboratorios modernos de experimentación política: como si quisieran recordar periódicamente al mundo su pertenencia, la sensibilidad de los chilenos a las grandes corrientes internacionales del pensamiento parece ir en proporción inversa al enclaustramiento físico que les ha impuesto su entorno; y así una y otra vez, particularmente durante el presente siglo, este país ha sido el escenario de experiencias inéditas de gobierno con resonancias de alcance universal.

Los últimos años de la historia chilena han estado muy lejos de ser una excepción: la actualidad internacional de Chile se funda hoy en dos grandes logros, que comienzan a verse enlazados: de una parte, el país muestra casi una década de fuerte y sostenido crecimiento económico, que alcanza un promedio superior al 6 por ciento anual, lo que lo sitúa como la economía más vigorosa de América Latina; de otra, tras dejar atrás un período de agudo conflicto político, que alcanzó su paroxismo con el imperio de una de las dictaduras más aborrecidas del planeta, ha restablecido su sistema democrático mediante un proceso de transición ejemplarmente eficiente y pacífico. De allí que la referencia al “modelo chileno” se haya hecho en los últimos años tan recurrente como contradictoria: se la encuentra entre quienes promueven recetas de “ajuste estructural”, entre quienes pregonan la necesidad de dictaduras, entre quienes impulsan grandes transformaciones democráticas, entre quienes buscan reducir las desigualdades sociales y también entre quienes ven en éstas una fuente insustituible del dinamismo social...

Tal diversidad de puntos de mira no hace sino atestiguar la complejidad de la gran transformación que tuvo lugar en Chile, la que, por esa razón, debiera ser estudiada con detenimiento. La tesis de fondo que subyace a este artículo es incluso que en Chile se vivió una auténtica “revolución capitalista”, y no tan sólo un proceso de “ajuste estructural”. Contradictoria como toda revolución, se rebela contra las interpretaciones simplistas; producto, como toda revolución, de circunstancias históricas únicas y específicas, se resiste a cualquier intento de reducirla a un caso más dentro de supuestas “leyes generales de la historia”; pero, al mismo tiempo, esta gran transformación chilena, como acontece como todas las revoluciones, aparece cargada de significados de alcance universal.

La experiencia chilena fue ciertamente dramática, y tanto durante su transcurso como en su posterior evaluación ha originado intensos debates ideológicos. Tales debates, como suele suceder, han estado interesados más en la toma de partido que en la precisión de los factores que constituyeron y explicaron dicha experiencia. A raíz de ello, un conjunto de imágenes distorsionadas sobre la misma han adquirido cierta difusión.

El análisis de esta propuesta muestra que muchas de las nociones ideológicas que actualmente se asocian a la experiencia chilena, tanto en el país como en el exterior, no tienen un real sustento histórico. La inconsistencia de las principales falacias que dan origen a nociones este tipo se muestra con cierto detalle en los puntos que siguen; conviene, sin embargo, advertir desde un inicio acerca de cuatro ideas que, a pesar de su notable difusión y más allá de las implicaciones políticas que de ellas suelen derivarse, se postulan aquí como abiertamente falsas:

Este texto es parte de la Introducción del libro que se publicará con los resultados de la investigación "Crisis, adjustment and social change: a programme for improving economic and social analysis and indicators. The case of Chile", perteneciente al Programa UNRIDS (United Nations Research Institute for Social Development). En la investigación colaboraron Javier Martínez y Alvaro Díaz.

Primera falacia: el éxito de la experiencia chilena de transformación económica se debió al carácter dictatorial del gobierno de Pinochet, que la llevó adelante.

Esta falacia tiene versiones tanto “de derecha” (que buscan persuadir acerca de la necesidad de dictaduras en otros países), como “de izquierda” (que buscan persuadir contra las transformaciones orientadas a la liberalización de los mercados en otros países). En ambos casos, sin embargo, se da como cierto un hecho que no lo es.

Por cierto, la etapa fundamental de la transformación económica chilena se produjo *durante* la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet y fue directamente promovida e impuesta por las autoridades económicas designadas y respaldadas por los militares. Pero esto hace parte de las características específicamente nacionales de esta experiencia: la dictadura militar surgió en Chile como una reacción frente a la situación de ingobernabilidad que generaron las luchas sociales que acompañaron las reformas socializantes del gobierno de Salvador Allende; la base de sus reclamos de legitimidad fue el orden político y no la transformación económica. Sólo más tarde, como *resultado* de la radicalidad política de la propia acción militar (y siguiendo un patrón históricamente recurrente en las escasas intervenciones militares en la política chilena), surgió la necesidad de un programa económico igualmente radical que sustentara sus pretensiones de permanencia.

Si se busca, sin embargo, ir más allá de los aspectos estrictamente episódicos de la experiencia chilena, es necesario preguntarse hasta qué punto *el carácter dictatorial del régimen político* fue consustancial a la transformación económica, en primer término; y, segundo, al hecho de que ella haya resultado finalmente *exitosa*.

El análisis detenido muestra que no fue su sustento de fuerza, sino su capacidad para *independizarse* de los intereses inmediatos de los agrupamientos sociales que lo llevaron al poder, lo que permitió al gobierno de Pinochet realizar una completa reestructuración del capitalismo chileno. Una y otra cosa no son equivalentes: ni la mayor autonomía relativa de la política (y en particular del Poder Ejecutivo) es propia de todas las dictaduras, ni su ausencia es característica propia de otro tipo de regímenes.

Sobra decir que la historia latinoamericana está plagada de dictaduras militares —muchas de ellas caudillistas, pero otras tanto o más “institucionales” que la de Pinochet— que han estado lejos de echar las bases para una nueva forma de funcionamiento de sus sociedades económicas. A la inversa, las recientes experiencias de transformación “libremercadista” en países como México, Bolivia o incluso Argentina, muestran que esta capacidad de autonomización se asocia más estrechamente a la magnitud de las crisis económicas previas que a las características del régimen político.

A ello debe agregarse un dato pocas veces mencionado, y que conforma el reverso de la medalla: los principales factores que pusieron en peligro el éxito de la transformación económica chilena, como revela claramente el examen de las políticas económicas aplicadas entre 1978 y 1983, estuvieron asociadas a la *rigidez* en el sistema de toma de decisiones derivada del carácter dictatorial del régimen político chileno de entonces.

Segunda falacia: la reasunción del camino democrático en Chile fue un resultado del éxito de esta misma transformación económica.

Esta es una falacia asociada estrechamente al materialismo vulgar que sustenta tanto al neoliberalismo en boga cuanto a la noción marxista de “democracia burguesa”. Si en alguna parte del mundo la democracia ha sido “resultado” de una revolución capitalista, éste *ciertamente no fue* el caso de Chile.

La democracia ha sido, antes que nada, una larga tradición política de Chile, y la persistente vigencia simbólica de esta tradición fue el más rebelde obstáculo que encontró el régimen de Pinochet en sus intentos de legitimación y permanencia. En segundo lugar, y aun más importante, el examen de los hechos no deja duda alguna en cuanto a que la fuerza que hizo posible la reconquista de la democracia en Chile provino de una profunda *rebelión de masas* contra la dictadura de Pinochet, que encontró finalmente su cauce de expresión en la antigua elite del sistema partidario y su oportunidad de victoria en los propios mecanismos institucionales previstos por el régimen autoritario para su perpetuación cesarista.

Por esta razón, para cualquier observador interesado en el estudio de la relación entre economía y política, la pregunta adecuada respecto al caso chileno debiera ser incluso la inversa a la del materialismo vulgar: ¿Por qué la consolidación de la democracia en Chile requirió la derrota del régimen político que había logrado echar las bases para la consolidación del capitalismo en el país? ¿Por qué esta “revolución capitalista” tardía no sólo no condujo al surgimiento de nuevos actores capaces de convertir las nuevas posiciones adquiridas por los intereses privados en *hegemonía* política, sino además tendió a la destrucción de las antiguas formaciones partidarias de la derecha política —cuya crisis se arrastra hasta hoy, a casi cuatro años de la derrota política de Pinochet? La relativa *autonomía de la política*, y el modo cómo desde ella se produjeron las condiciones que hicieron posible el regreso a la vigencia del régimen democrático, son cuestiones que encuentran en el caso chileno un campo de observación apasionante.

Tercera falacia: las experiencias socializantes ocurridas en Chile en el período inmediatamente anterior a la implantación del esquema de “libre mercado” significaron un importante obstáculo para la realización de las reformas y la posterior eficacia de las mismas.

A los chilenos suele atribuírseles tanto la pícara gracia andaluza como la grave circunspección de los vascos. Esta falacia es la “seria” versión chilena del conocido chiste atribuido... a los polacos: “¿Qué es el socialismo?”, pregunta un polaco. “El camino más largo al capitalismo”, contesta el otro.

Sin embargo, en este caso particular al menos, el chiste no encuentra un material histórico adecuado: no sólo debido a lo breve de la experiencia socialista y a lo prolongado de la dictadura que condujo la “revolución capitalista”, sino también al hecho de que esta última encontró en los efectos de la primera una clave importante de su eficacia.

Al asumir el poder la dictadura militar en Chile, en efecto, buena parte de las relaciones sociales que cimentaban la “histórica” estructura económica chilena se encontraban, por decirlo así, *en estado líquido*: el latifundio había sido pulverizado por las masivas expropiaciones de la reforma agraria, la totalidad de la banca había sido estatizada o intervenida, buena parte de la industria protegida se encontraba bajo la propiedad o la dirección de entes estatales y, *last but not least*, la gran minería del cobre —el producto básico de exportación de Chile— había sido nacionalizada.

El carácter *modernista* y no simplemente *restaurador* de la dictadura de Pinochet se definió precisamente en la reorientación de estas transformaciones previas. Bástenos citar aquí, a modo de ejemplo, el camino seguido por la transformación agrícola, una de las claves de la nueva orientación exportadora de Chile: sólo una tercera parte de la tierra expropiada por el programa de reforma agraria (precisamente aquella cuyas formas de propiedad y explotación anteriores no correspondían plenamente al sistema del latifundio) fue devuelta a sus antiguos propietarios. El resto fue asignado en propiedad de pequeñas parcelas a los campesinos, según estaba previsto por el propio programa de reforma agraria, pero sin prestar a éstos la asistencia técnica y crediticia que el mismo programa acordaba. El resultado fue una masiva venta de predios de tamaño apto para la explotación capitalista racional, la conformación de un *mercado de tierras* allí donde por siglos la movilidad de los factores había sido obstaculizada por la señorial transmisión hereditaria de extensiones adecuadas al rango social reclamado por sus dueños, pero infinitamente superior al tamaño de los capitales de que disponían para hacerlas producir.

La base social que sustentaba al régimen de Pinochet ciertamente no le habría permitido realizar un programa masivo de expropiaciones como el que se realizó previamente, enfrentando a una poderosa oligarquía terrateniente; pero la relativa autonomización que obtuvo frente a la misma, precisamente posible merced a la debilidad en que ésta se encontraba tras la liquidación previa de sus bases materiales de poder, le permitió reorientar la reforma en un sentido capitalista y consolidar el apoyo de la antigua oligarquía, *consumando* la expropiación (mediante el pago actualizado de los “bonos” emitidos por el Fisco con tal propósito, lo que, por cierto, contribuyó a aumentar las captaciones de un renaciente y ávido sistema financiero privado).

Torsiones similares pueden encontrarse en los casos de la industria, de la banca, de la minería. Lejos de representar obstáculos, las reformas socializantes previas significaron *la oportunidad* para remodelar (desde el poder político, y mediante un proceso metódicamente conducido de “expropiación del Estado”) un capitalismo subdesarrollado que cargaba en sus espaldas no sólo la “crisis del Estado de Bienestar” a

la que aludían los ideólogos neoliberales, sino también las pesadas pervivencias patrimonialistas o “feudales”, como las llamaron los ideólogos comunistas de otrora. La transformación económica chilena *no fue una restauración*, porque las fuerzas sociales que habrían podido reclamarla estaban ya debilitadas en extremo: esta fue una clave fundamental de su “éxito”.

Cuarta falacia: la experiencia chilena es un caso histórico más de constitución de un capitalismo “en forma” por medio de una rebelión de la sociedad civil contra el Estado, tendiente a limitar su campo de acción y así ampliar el de las libertades individuales.

Para decirlo derechamente: salvo el hecho de haber clausurado ambos el Parlamento, ninguna semejanza, por más que se la busque con ahínco, puede encontrarse entre Pinochet y Cromwell. La transformación chilena puede describirse como una revolución capitalista, *pero no como una revolución “burguesa”*.

Precisamente en este punto radica el “misterio” de la relación entre capitalismo y democracia en el caso chileno: lejos del modelo anglosajón, la “sociedad civil” en Chile es hija directa del Estado, conformado prematuramente por las necesidades de la larga Guerra de Arauco (una guerra de resistencia indígena feroz e intermitente, que se prolongó por el período nada despreciable de trescientos años). Un notable historiador* destaca del siguiente modo esta marca de nacimiento de la sociedad chilena: “La imagen fundamental y primera que de Chile se tiene es que constituye, dentro del Imperio Español en las Indias, una frontera de guerra, *una tierra de guerra*.” A este origen, que marca profundamente las características de los períodos de la Conquista y la Colonia, se corresponde también el primer siglo de la República independiente nacida en 1810: a la Guerra de Arauco, que continuó hasta 1883, se sumaron en efecto durante el siglo XIX las guerras de la Independencia (prolongadas luego en la guerra contra los realistas del sur), la campaña para la liberación del Perú, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839, la guerra naval contra España (1864-66), la guerra del Pacífico (1879-83) y la guerra civil de 1891. Por esta razón, como señala este historiador, “la nacionalidad chilena ha sido formada *por un Estado que ha antecedido a ella*, a semejanza, en esto, de la Argentina; y a diferencia de México o del Perú, donde grandes culturas autóctonas prefiguraron los Virreinos y las Repúblicas.”

Pero el Estado en Chile no sólo precedió a la sociedad civil: más importante aún, fue su progenitor, el artista que modeló cada uno de sus rasgos principales. Es cierto que la manutención de un ejército en guerra constante significó ingentes gastos para la Corona española primero y para el Gobierno republicano chileno después, a lo largo de todo el siglo XIX; también lo es, sin embargo, que la economía privada pudo comenzar a desarrollarse en el país en estrecha asociación con los éxitos de estas campañas militares. Pero hay algo más decisivo: históricamente, *la expansión* del Estado en Chile desde los inicios del siglo XX no se realizó imponiendo una creciente carga sobre la economía nacional privada, sino incluso aliviándola; las dos grandes fuentes sucesivas de recursos de la economía fiscal vinculadas a la renta minera —la tributación a las exportaciones de salitre primero, los tributos y las ventas de cobre después— permitieron al Estado un desarrollo “autónomo” sustentado en la negociación con la inversión extranjera, que no significaba gravamen para el propietario nacional. La renta minera, administrada por una clase media funcionaria que alcanzó vastas proporciones una vez superado el ciclo guerrero (y que por largo tiempo mostró un dinamismo modernizador muy superior al del empresariado privado), fue puesta luego al servicio de un prolongado esfuerzo de industrialización subsidiada, a cuyo amparo creció una parodia de “burguesía nacional”. Esta fue en Chile una hija del Estado moderno, y no a la inversa.

La gran transformación económica reciente en Chile guarda continuidad con esta gruesa impronta histórica: es en la nueva conformación de la elite estatal, en consecuencia, y no en las “clases” sociales previamente constituidas, donde hay que buscar el actor clave de la “revolución capitalista” que tuvo lugar en este país durante las últimas décadas. Y si ésta fue aquí una *revolución*, y no sólo una nueva era de reformas, es precisamente porque logró finalmente invertir el modelo histórico de relación entre Estado y sociedad que caracterizaba a la nación desde sus orígenes.

* Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX* (Santiago: Ediciones La Ciudad, 1981).

¿Cuán perdurables serán los efectos de esta transformación? El nuevo escenario se encuentra, en verdad, a la espera de los actores: la transformación económica desatada desde el Estado por una elite tecnocrática abrió los espacios que empezaron a ser llenados por una nueva generación de empresarios “de mercado”, de orientación fuertemente innovadora y competitiva; la transformación política desatada por una rebelión de masas abrió los espacios por los que emergió una renovada clase política civil, alejada de las antiguas confrontaciones ideológicas y orientada claramente hacia la construcción de nuevos consensos. La clave de la “transición” chilena consiste en la posibilidad de constitución de un nuevo núcleo dirigente, a partir de la conexión que se establezca entre estos nuevos actores. Pero esto requiere la emancipación de unos y otros respecto de las circunstancias específicas que les dieron oportunidad de nacer.

Y esta historia recién comienza a escribirse.